

EPÍLOGO - Desigualdad socioeconómica y vulnerabilidad criminológica en Costa Rica

La desigualdad socioeconómica en Costa Rica no constituye únicamente una brecha estadística ni un desafío pendiente en materia de desarrollo humano; representa una arquitectura territorial de riesgo que condiciona de manera directa la distribución de la violencia, la victimización y la criminalidad. El análisis del eje socioeconómico del Observatorio Municipal de la Unión Nacional de Gobiernos Locales evidencia que los cantones no enfrentan realidades homogéneas, ni poseen las mismas capacidades institucionales para responder a contextos de vulnerabilidad estructural. La criminalidad, lejos de surgir como fenómeno aislado o meramente individual, se inscribe en territorios donde la exclusión social se acumula y se reproduce históricamente.

El estudio demuestra que la pobreza y la pobreza extrema operan como factores criminológicos estructurales que configuran entornos de riesgo persistente. Cuando la precariedad laboral, la deserción educativa, la fragilidad institucional y la limitada presencia estatal convergen en un mismo territorio, el debilitamiento del control social informal y la normalización de dinámicas violentas dejan de ser hipótesis teóricas y se convierten en realidades observables. La desigualdad territorial, en este sentido, no solo distribuye de manera desigual las oportunidades, sino también el daño social.

Más allá de la lectura descriptiva de indicadores, este análisis invita a replantear el paradigma tradicional de seguridad ciudadana. La evidencia territorial confirma que la prevención del delito no puede desvincularse de la planificación del desarrollo, de la inversión pública focalizada y de la justicia territorial. Cuando el acceso a oportunidades legítimas es sistemáticamente limitado en determinados cantones, el riesgo criminológico se convierte en una consecuencia estructural previsible. Ignorar esta relación implica perpetuar respuestas reactivas que atienden los efectos, pero no las causas.

Integrar los datos del Observatorio Municipal en la gestión local supone reconocer que cada indicador socioeconómico es también una señal preventiva anticipatoria. La identificación de cantones con alta concentración de pobreza y pobreza extrema no debe generar estigmatización, sino priorización estratégica. La prevención eficaz exige intervenir antes de que la vulnerabilidad

estructural se traduzca en trayectorias delictivas consolidadas, en violencia intrafamiliar recurrente o en economías ilícitas arraigadas en el territorio.

Desde el Observatorio Criminológico de la Unidad para la Prevención y Análisis Criminológico (UPAC), este estudio reafirma que la criminología posee un papel determinante en la transformación de la política pública. La traducción técnica de datos socioeconómicos en alertas tempranas, diagnósticos territoriales y recomendaciones estratégicas fortalece la gobernanza local de la seguridad ciudadana. No se trata únicamente de producir conocimiento, sino de convertir la evidencia en decisiones concretas, sostenidas y articuladas interinstitucionalmente.

El presente artículo plantea un análisis donde se convoca a una reflexión profunda sobre el desafío ético y político que hoy enfrenta Costa Rica. Reconocer que la reducción sostenible de la criminalidad exige intervenir sobre las desigualdades que la alimentan. La seguridad ciudadana no puede concebirse como un fin aislado, sino como el resultado de territorios más equitativos, cohesionados y con mayor capacidad institucional. Invertir en prevención social del delito no es solo una estrategia técnica; es una decisión estratégica de desarrollo nacional.

Este análisis, proyecta hacia una agenda permanente de intervención territorial y acción preventiva. La información existe. Los diagnósticos están disponibles. El reto radica en consolidar una voluntad institucional que articule planificación, evidencia y acción sostenida. Solo así será posible avanzar hacia un modelo de seguridad que no responda únicamente al delito consumado, sino que transforme las condiciones estructurales que lo hacen posible.

La desigualdad territorial no es un dato neutro: es un mapa de riesgos. Pero también puede convertirse en un mapa de intervención estratégica, si se asume la prevención como eje central del desarrollo y de la justicia social en Costa Rica.